

# BOLIVIA

## CUATRO SIGLOS DE LUCHA CAMPESINA

Por CARLOS NUÑEZ

29 de noviembre de 1969. Carretera de Cochabamba a Santa Cruz, kilómetro 7. Una pedrada destroza el vidrio de un jeep; sus dos ocupantes descienden para averiguar el origen de la agresión. Otro vehículo, un Toyota de color claro, se acerca hasta ellos; desde su interior, súbitamente, comienzan a disparar al unísono cinco metralletas calibre 45.

Uno de los ocupantes del primer jeep cae de bruces en una zanja, al parecer exánime. El otro se retuerce alcanzado por una verdadera lluvia de tiros, hasta caer agonizante sobre el camino. Uno de los ejecutores se acerca hasta él, hurga en su cintura y le arranca el revólver que el caído no ha alcanzado siquiera a empuñar. Con un juramento ininteligible, sin soltar la metralleta aún humeante, martilla el revólver, apunta a la sien del moribundo y dispara el tiro de gracia.

Embriagados por el olor a pólvora y los vapores de la chicha con que han cobrado valor para el asesinato, los verdugos montan nuevamente en el Toyota y parten.

Sobre la carretera, Jorge Soliz Román, dirigente sindical campesino, ex senador, ex ministro, ha vuelto a identificarse con su pueblo y con su raza: instrumentado y utilizado por la rosca a la que creyó combatir, ha pagado con su vida el precio de esta ilusión.



### DESTINO DEL COLLASUYO

A lo largo de un año y medio, el más impenetrable misterio rodeó la muerte de Jorge Soliz. Hoy es posible saber cómo y por qué pudo mantenerse a resguardo el secreto. Pe-

ro quizás no sea la menor de las ironías encerradas por este caso el hecho de que la verdad haya podido descubrirse precisamente a pesar de la representatividad que investía la figura de Soliz.

Porque la muerte violenta de un dirigente campesino no resulta ciertamente una novedad en Bolivia (en rigor, a través de toda la dramática historia del país del Altiplano, ninguna muerte violenta resulta sorprendente). Es una circunstancia azarosa la que ha proporcionado a Soliz una relativa — muy relativa — justicia póstuma: que su muerte haya sido precedida por la de un capitosté del régimen, su compadre René Barrientos Ortuño, y seguida por la de algunas figuras pertenecientes a la burguesía boliviana: Jaime Otero Calderón y los esposos Alexander.

El caso es, empero, que la relación que ha intentado plantearse entre todas estas muertes — la participación o el común conocimiento sobre un presunto contrabando de armas a Israel — no comprende de hecho a la de Jorge Soliz, única totalmente aclarada hasta el momento. Ironía aún mayor: hasta después de muerto, el dirigente campesino ha resultado utilizado por sus enemigos de clase.

Pero tal vez haya una forma de hacer verdadera justicia a Soliz y a quienes él debió representar: tratar de comprender, a la luz de su vida y su muerte, la ausencia del drama histórico que tiene como protagonistas a los campesinos bolivianos.

Es una historia de siglos. Y es, como dijera Augusto Céspedes en su obra *El dictador suicida*, "una historia tendenciosa y complicada".

En tiempos del Imperio incaico, el "Tahuantinsuyu" (las cuatro regiones de la tierra, o los cuatro puntos cardinales), los indígenas quechuas y aymaras del "Collasuyo" (el sur) cultivaban la tierra de sus comunidades ("ayllu"), en el altiplano y en el valle de Cochabamba, bajo el autoritarismo paternalista de sus caciques ("curacas"). La estructura vertical del incario se hacía soportable a sus súbditos no sólo por la raíz religiosa del poder imperial, sino fundamentalmente porque el centralismo de la administración incaica tenía buen cuidado de no afectar la organización comunitaria de los campesinos, cuyo trabajo y cuya distribución de riquezas se realizaban sobre bases colectivistas.

Pese a la creciente decadencia del imperio del sol, la organización comunitaria se conserva plenamente en momentos de iniciarse la conquista española. Cuatro siglos más tarde, el peruano José Carlos Mariátegui resumirá la historia con un párrafo tajante: "Sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista (los españoles) echaron las bases de una economía feudal".

El feudalismo que los españoles implantan en América tiene sin embargo sus peculiaridades: los hijosdalgos empobrecidos que vertebran, junto a *lumpens* y soldados de fortuna, las fuerzas de la conquista, usurpan la tierra más que nada como forma de sustentar un *status* nobiliario cuyos símbolos son dictados por la arcaica estructura social de la metrópoli. Los conquistadores se transforman así en latifundistas advenedizos sin alterar necesariamente las bases comunitarias

de explotación agrícola; al menos en el árido altiplano, las comunidades indígenas se mantendrán de esa forma durante mucho tiempo después de iniciada la conquista, al precio de los pesados tributos que debían pagarse a los nuevos patrones.

Pero el "ayllu" comienza a desintegrarse por otra vía. En el Collasuyo, que la colonia ha rebautizado como Alto Perú, la explotación minera se asienta sobre la mita, régimen de encubierto esclavismo que pretende presentarse como trabajo asalariado y que teóricamente, a su término, debe convertir en libertos a los indígenas. Pero ese término rara vez se respeta: de una u otra forma, los mitayos (más de quince mil por turno trabajan en todas las minas, principalmente en las argentíferas de Potosí) son retenidos en su trabajo hasta que mueren. Se ha dicho que con la plata arrancada por los españoles al subsuelo boliviano podría haberse construido un puente desde Potosí a Madrid. Sin duda un puente mucho más largo y macabro podría haberse erigido con los pulmones que los indígenas del Collasuyo dejaron en los socavones de su tierra.

Cuando se anunciaba el llamado a la mita, muchos de los indios requeridos abandonaban su comunidad y trataban de esconderse en las estribaciones cordilleranas, pero eran perseguidos y cazados por milicias armadas. Ya entonces, los dominadores comenzaron a corromper y utilizar a sus caciques, que colaboraban con ellos en la persecución de los rebeldes.

"Así — recuerda Gabriel René Moreno —, los mitayos eran conducidos a la muerte con seguridad, sin dejar de oír misa los domingos".

Esa inhumana explotación ni siquiera sirvió para capitalizar a la futura república de Bolivia: de hecho, la plata de Potosí constituyó — como lo han señalado varios historiadores, Dardo Cúneo entre ellos — la base del capitalismo europeo y de su economía monetaria.

Ya en 1730, sin embargo, los altoperuanos dan una primera muestra de su vocación rebelde: el pueblo de Cochabamba, encabezado por el mestizo Alejo Calatayud, se alza contra el régimen colonial y llega incluso a sustituir transitoriamente a sus representantes provinciales.

Pero será en 1780, todavía treinta años antes de que comience la gesta independentista de los criollos americanos, cuando el Tahuantinsuyu se verá trágicamente convulsionado por grandes rebeliones de los antiguos súbditos incas. Desde la vieja capital del imperio, El Cuzco, un torrente indígena encabezado por José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, barre con los españoles y recupera efímeramente sus comunidades.

El alzamiento repercute vívidamente en el Alto Perú, donde poetas populares recogen el significado ejemplar de la rebelión en versos como éstos:

**"Ya en el Cuzco con empeño  
quieren sacudir, y es ley,  
el yugo de ajeno rey  
y coronar al que es dueño.**

**"¡Levantarse americanos!  
tomen armas en las manos,  
y con osado furor,  
¡maten sin temor  
a los ministros tiranos!"**

Los altoperuanos, empero, no se quedan en las palabras; en Macha (Potosí), los hermanos Dámaso y Tomás Katari encabezan una insurrección indígena, así como en La Paz lo hace Julián Apaza, que toma el nombre inca de Tupac Katari. La respuesta de los colonizadores españoles es obviamente la misma recibida por Condorcanqui: los indios son masacrados despiadadamente.

Ni la independencia, ni la república, ni siquiera la revolución nacionalista, harán olvidar este método represivo: desde hace cuatro siglos, las masacres de campesinos e indios (términos históricamente sinónimos) son una constante en la historia de Bolivia.

### USURPACION Y MASACRES

"El temor de la oligarquía altoperuana a la intervención de las masas indígenas en la independencia, pudo advertirse en la campaña de Belgrano en Vilcapugio, donde los terratenientes se negaron a prestar su apoyo para el armamento de los indios", ha señalado Jorge Abelardo Ramos.

Pese a esta oposición, empero, los campesinos indígenas del Collasuyo, en buena medida precursores del alzamiento contra el español, se enrolaron decididamente en la gesta independentista de los criollos altoperuanos, nutriendo las columnas guerrilleras que convergieron con las tropas de Sucre en la derrota de los colonizadores.

Incluso antes de que las fuerzas colombianas se hicieran presentes en el Alto Perú y doblegaran la resistencia del realista Olañeta, los indígenas llegaron a tener participación destacada en la Junta Tuitativa encabezada por Pedro Domingo Murillo en 1809. Presumiblemente a instancias de éste, fueron incorporados a la Junta los representantes Katari Incacollo, de la indiada de Yungas; Gregorio Roxas, de la de Omasuyos, y José Sanco, de la de Sorata.

La rebelión paceña fue entonces aplastada y los indígenas se vieron una vez más radiados de la vida nacional. Tres lustros más tarde se instala la república presidida por Sucre, pero la situación no cambia, a pesar de las buenas intenciones que empujaron el camino de la Constitución dictada por Bolívar.

Vale la pena saber cómo los indios del Alto Perú ven entonces al Libertador: "Era —describe Carlos Montenegro— como un meteoro deslumbrador que cruzara sobre el paisaje gris de un planeta en agonía, infundiéndole el calor y la luz de su incandescencia maravillosa. Miller ha contado en sus Memorias cómo negreaban las masas indias, descorazonadas por la República, agolpándose sobre los caminos que recorría Bolívar para saludarle. No era por nada. Honraron así a quien había sido capaz de ordenar la devolución de la tierra a sus poseedores originarios expoliados por la Conquista y la Colonia. Como una gran serpiente cobriza acompañó al Libertador el cortejo de la indiada reconocida.

Le siguió hasta el Desaguadero, cuando Bolívar se fue al Perú, para no volver nunca, como si su destino fuese realmente el de un meteoro".

La justiciera disposición de la Constitución bolivariana, de más está decirlo, nunca se cumplió. Los indígenas del Collasuyo, empero, recuperaron la esperanza con Santa Cruz, quien para la casta colonial era "tan solo el indio jetón alzado contra sus señores, a quienes impuso la autoridad y la ley republicanas como caudillo de la raza adversaria, pues —bien lo ha dicho O'Connor—, verdad era que la clase indígena de Bolivia y del Perú, viendo en él un descendiente directo de sus antiguos reyes le profesaba un amor que rayaba en religiosa veneración". (Montenegro).

Pero la confianza de los indios y el disgusto de los señores habrían de durar ciertamente poco: el 2 de julio de 1829, Santa Cruz promulga una ley que restituye a los indios del altiplano a la condición servil abolida en el papel por Bolívar. "Desde el Decreto Santa Cruz —anota Reyeros—, la servidumbre personal que en realidad no se había extinguido, ni morigerado, adquiere el carácter de una institución pública".

Así, ya promediando el siglo, en la época de Belzu, un periódico boliviano podrá todavía señalar: "Parece que entre nosotros, el infeliz indio hubiese sido condenado por la naturaleza a no tener sobre la tierra otra misión que la de sufrir y padecer sin gozar jamás de nada. No existiendo entre ellos y nosotros una verdadera sociedad, puesto que no hay igualdad de derechos y de obligaciones, se creen y los consideramos como seres de distinta especie. Conquistado en América el principio republicano, después de una tenaz y prolongada lucha, eran de esperarse grandes mejoras en todas las clases de la sociedad; pero, desgraciadamente, no ha sucedido así. El indio es hoy, con poquísima diferencia, lo mismo que era hace trescientos años, ¡quién lo creyera! Apenas ve el infeliz indio la luz primera, cuando principia a sentir el peso de su malhadada existencia. Poco tiempo después consagra toda su vida al cultivo de tierras que no le pertenecen, al cuidado de ganados y propiedades que no son suyos, y al aumento de todo género que ha regado con su sudor y sus lágrimas, para no participar sino lo muy necesario para no morir de hambre... ¿Hasta cuándo, pues, esta infortunada raza permanecerá condenada a tan degradante abyección? Dispénsese siquiera una protección decidida al trabajo del indio; que no esté sujeto él a los caprichos de los que quieren vivir a expensas de las lágrimas y de los desgarrantes gemidos de esos infelices..." (Se respeta la ortografía original).

De tal forma no puede resultar extraña la anotación de Montenegro: "La población india no hacía parte activa del cuadro social diseñado por la República. Confinóse por sí misma en un hosco aislamiento con el cual expresaba su repudio de este nuevo régimen, que para ella era idéntico al viejo".

Quizás no sólo idéntico: pronto podrían llegar a sospechar que el llamado "nuevo régimen" era, a sus efectos, probablemente peor.

Las tierras comunitarias que habían logra-



do eludir la avaricia latifundista de los colonizadores y habían llegado a superar la despooblación provocada por la mita, las periódicas masacres y las guerras civiles, no lograron en cambio escapar a la rapacería que se encaramó al poder de la república con la persona de Mariano Melgarejo, ese sanguinario clown a quien Céspedes ha llamado certeramente "el más notable usurpador de las comunidades indígenas".

En 1869, Melgarejo dictó un decreto por el cual, en el término de sesenta días, todos los comunarios bolivianos debían "perfeccionar" sus títulos de propiedad mediante el pago de un tributo; vencido ese término, las tierras que no hubieran sido legitimadas pasaban a dominio del Estado, que podía venderlas al mejor postor. El sistema se parecía mucho al utilizado por los conquistadores españoles a su llegada a las Indias: primero aplastaban por las armas a los aborígenes y luego lesaban, en una lengua extraña para éstos, el bando por el cual la Corona española reclamaba vasallaje y amenazaban con someter a quienes se resistieran. Obviamente, los comunarios no llegaron a enterarse del decreto de Melgarejo hasta que sus tierras les fueron arrebatadas.

El "mejor postor" autorizado por el decreto no sería por cierto el más alto, sino simplemente el ofertado por los compinches y paniaguados del dictador (que no fue sólo pródigo con sus adictos, sino que incluso regaló varios miles de kilómetros cuadrados del territorio boliviano al gobierno de Brasil, en agradecimiento por el obsequio de un caballo). A tal punto que el propio ministro de Hacienda del régimen, Manuel Lastra, admitió en su memoria a la Asamblea del año 1870: "El valor de las 356 comunidades vendidas hasta el 31 de diciembre de 1869 ascendía a 856.550 bolivianos, de los que únicamente se empozaron en Tesorería 177.537 pesos".

La usurpación, sin embargo, no había sido aceptada dócilmente: los comunarios se alzaron en reclamo de sus derechos, pero fueron reprimidos con aterradora violencia. Sólo en un área muy limitada próxima al lago Titicaca fueron asesinados más de dos mil indios.

El final de la historia es en gran medida ejemplar. Así lo ha registrado Augusto Céspedes: "Cuando el general Melgarejo, después de seis años de sanguinaria satrapía, cayó en la última revolución que se le hizo, la asamblea de próceres que se reunió para reorganizar el país (1872) anuló todos los actos de aquel régimen oprobioso. Empero, estableció recursos tan curulescos para anular la ley que dispuso la venta en subasta pública de las tierras de propiedad secular de las comunidades indígenas, que éstas no pudieron recobrar más dichas tierras. Los únicos concurrentes a la subasta habían sido los oligarcas que rodeaban y que no rodeaban a Melgarejo, de modo que el despojo quedó legalmente consagrado por los próceres libertarios".

La entrada en el siglo veinte no produjo tampoco ningún cambio en la situación. A esta altura cabe anotar, empero, que los campesinos indígenas no podían ser ya olímpica-

mente ignorados por los grupos dominantes: los comunarios y los que, absorbidos como trabajadores por el latifundio, no han perdido del todo la esperanza de reconstruir su ayllu, constituyen una enorme fuerza social. Como tal comienzan a ser utilizados por los grupos oligárquicos en pugna. Valga un sencillo ejemplo:

El Partido Liberal propugna el federalismo y levanta a los indios contra los conservadores en el poder. Triunfante la insurrección, los liberales implantan una constitución unitaria: el cacique Wilca reclama contra esta traición y es fusilado.

El general Ismael Montes, presidente por el mismo Partido Liberal entre 1906 y 1910, se apodera de las tierras campesinas de Taraco. Los indios que se niegan a "venderle" su cuota parte de la comunidad son acusados de insurrectos. La toma de posesión de esas tierras genera una reacción colectiva, reprimida implacablemente por el ejército. Tras la masacre, los sobrevivientes son fusilados; quienes escapan y son luego apresados terminan entre rejas. Uno de los campesinos al que se responsabiliza de los hechos, Marca Tola, habrá de pasar veinticinco años en la cárcel de La Paz.

"A principios de este siglo —ha resumido Dardo Cúneo—, la agricultura significa servidumbre del hombre y servidumbre de la comunidad; sus bajísimos niveles de producción determinan que Bolivia, país de riquísimas potencias agrarias, tuviera que importar cereales para consumo de su población, una de las poblaciones de menor consumo en el mundo. Las mayores escalas de esclavitud se dan cuando al venderse un latifundio se vende con él la mano de obra india y mestiza. Y hay latifundios tan grandes como Bélgica y Holanda. En ese cuadro de vacíos sociales, era lógico que las energías del mestizo que habían explotado en las horas de la independencia sigan siendo reprimidas por las sobrevivientes instituciones de desolación colonial y que nuevamente explotaran en insurrecciones, alzamientos, motines".

Represión-alzamiento-represión: los términos de esta ecuación siguen indeleblemente la historia boliviana. Abundar sobre el tema podría ser interminable y ocioso. Baste decir que conservadores, liberales, republicanos (e incluso, ya se verá, quienes les siguen), todos están manchados de sangre campesina: Jesús de Machaca, Taraco, Vilavila, Caquiaviri, Macha, Achacachi, Warisata, abonan suficientemente la definición de Bolivia como una "geografía de masacres".

Es que, como dice Tristán Marroff, "ningún gobierno (boliviano) retrocede cuando se trata de matar indios".

Y dice bien: ninguno.

## II

### DE UCUREÑA A LA "ASAMBLEA POPULAR"

La sangre de los campesinos bolivianos no sólo se derramó en las masacres perpetradas por el ejército y en los enfrentamientos políticos entre grupos oligárquicos: cuando la nación necesitó de ellos, los indígenas del Co-



EL CHE en  
una de sus  
últimas fotos, con  
niños campesinos  
bolivianos.

llasuyo se batieron también en las guerras americanas azuzados por los intereses imperiales.

Las pruebas al respecto no dejan de ser significativas: en 1934, el gobierno dispuso el pago de veinte pesos a las familias de cada indio muerto en la guerra del Chaco. Esta suma fue luego reducida a ocho pesos. Por entonces, una res costaba como mínimo 80 pesos.

Pero la misma contienda del Chaco, señalada como cuna del llamado nacionalismo revolucionario (de ella surgirán los gobiernos de Toro y Busch, la logia Razón de Patria —RADEPA— que más tarde conducirá al poder a Villarroel, y el núcleo original de intelectuales que habrá de formar el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) despierta también en los campesinos una embrionaria conciencia de sus derechos y sus necesidades.

La galvanización de esa primitiva conciencia tiene fecha y lugar precisos: Ucuireña, 12 de octubre de 1935.

### LAS PRIMERAS LUCES

El latifundio donde se encuentra el área de Ucuireña tiene como origen la encomienda real concedida en 1595 al capitán Pedro Jiménez Vargas. Quizás para tratar de borrar de la memoria celestial los seguros crímenes del encomendero, uno de sus descendientes donó su parte de la herencia al Convento de Santa Clara hacia 1715. Como las clarisas son monjas de clausura, debieron confiar a otros la administración de la propiedad. Dos siglos más tarde, quien cumplía estas funciones era un cura de apellido Gamboa.

Aprovechando la marcha de los campesinos de Ucuireña hacia el frente del Chaco, el cura Gamboa intentó ocupar las tierras alquiladas por aquéllos, incluso ofreciendo a las esposas de Dios treinta mil pesos menos que lo que pagaban los arrendatarios indígenas.

Los abusos de Gamboa provocaron una sublevación que estalló el 12 de octubre de 1935. Obviamente, el ejército intervino prestamente para “restablecer el orden” (los civiles que habían participado en la guerra del Chaco

habían sido ya desmovilizados, tras el acuerdo de paz firmado en abril de ese año); de acuerdo con los relatos de la época, la forma en que el “orden” fue “restablecido” dejó una profunda huella en el ánimo de los colonos: asesinatos, robos, violaciones, cárcel para los sobrevivientes, recordaron una vez más a los campesinos que “ningún gobierno retrocede cuando se trata de matar indios”.

Paciente y confusamente comenzarán luego los intentos por crear los primeros sindicatos campesinos. El de Ucuireña nace entre 1936 y 1937, pero apenas es entonces un tibio fermento: como ejemplo cabe anotar que uno de los sindicatos de esa área, el de Ana Rancho, cuenta cinco años más tarde con sólo 51 colonos afiliados.

Según ha admitido posteriormente José Rojas Guevara, uno de los precursores de la agremiación campesina, fueron militantes de diversos grupos marxistas quienes inicialmente contribuyeron a organizar sindicatos agrarios. El mismo Rojas Guevara, nacido en Ucuireña en 1917, se mantuvo vinculado al PIR (Partido de Izquierda Revolucionaria, el primer núcleo partidario boliviano declaradamente marxista, que cumpliría luego una trayectoria crecientemente degradante, coronada en 1964-69 con su apoyo al régimen de Barrientos) por lo menos hasta 1947; posteriormente pasó a militar en el MNR. A su lado comenzará pronto a destacarse un joven dirigente: Jorge Soliz Román.

La sindicalización campesina pareció dar su primer fruto (que muy pronto se revelaría efímero) ya en 1939. Un mes después de la muerte de Germán Busch (¿suicidio o crimen político?: éste es todavía un tema polémico) el gobierno de Quintanilla —que había prometido “continuar la obra” de su predecesor, un dictador populista— dictó un decreto mediante el cual se creaba a la congregación de Santa Clara la obligación de vender preferentemente sus tierras a los colonos (septiembre 9 de 1939). Pero los mecanismos de la oligarquía agraria se pusieron de inmediato en funcionamiento.

El obispo de Cochabamba, monseñor Aspe, y el abogado Zabalaga, comprometieron al ministro de Agricultura y Colonización del



gobierno Quintanilla, Jorge Mercado Rosales, a derogar la disposición. Los negociadores entregaron al ministro 250.000 pesos (alrededor de doce mil dólares), procedentes de las clarrisas, a cuenta de los seiscientos mil que Mercado había fijado como "honorarios". El 2 de diciembre de 1939, un nuevo decreto derogó la disposición anterior que favorecía a los colonos. El profesor Guerra, militante izquierdista del núcleo escolar de Ucuireña, denunció la maniobra, que concluyó con la sentencia de la Corte Suprema condenando a Mercado Rosales a un año de cárcel. Pero no hay indicios de que el decreto del 2 de diciembre haya sido consecuentemente anulado.

En 1942, al crearse el MNR, hay en Bolivia cincuenta mil mineros y casi tres millones de indios; éstos, en su gran mayoría, viven "al margen de la economía monetaria, víctimas del gamonalismo terrateniente, reclusos en el autoconsumo, alimentados con coca, sometidos a la institución del «pongo», prestación obligatoria de servicio gratuito", según la descripción de Jorge Abelardo Ramos.

Sobre este fértil terreno comienza a trabajar el nuevo partido, que logra paulatinamente desplazar (o ganar para sus filas) a los militantes marxistas que han iniciado la tarea de sindicalización agraria. Llegados al gobierno junto a Gualberto Villarroel, los "movimientistas" capitalizaron algunas medidas dictadas por éste para extender su influencia en las comunidades. El 15 de mayo de 1945, por ejemplo, Villarroel en persona inauguró el Primer Congreso Nacional de Indígenas, que fue presidido por Chipana Ramos, un campesino de Puerto Acosta, en la frontera con Perú. Preamunciando el destino más habitual de los dirigentes campesinos instrumentados por el régimen de turno, Ramos fue radiado pronto de la actividad sindical: pobre y olvidado, murió en 1967.

Poco antes de su caída, Villarroel dispuso la importación de ochenta tractores canadienses para las principales comunidades agrarias (el gobierno oligárquico que lo sucedió en Palacio Quemado anuló la orden de importación). Pero, simultáneamente, en 1945, el MNR se comprometía en las masacres policiales contra campesinos de Los Molinos y Las Canchas, departamento de Potosí.

El 21 de julio de 1946, Villarroel termina colgado de un farol en la Plaza Murillo y, como sucede habitualmente, el finado carga con todas las culpas. Frente al avance de la rosca (oligarquía), el MNR se convierte en la única esperanza popular. La sindicalización agraria crece y se perfecciona. Ya prestigiado como dirigente campesino, Rojas Guevara es perseguido por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia y debe exiliarse en Buenos Aires; comienza a allegarse a los movimientistas.

Entre tanto, el ciclo represión-alzamiento-represión continúa vigente. En 1948, sublevados por la brutalidad patronal, los campesinos que trabajan en la hacienda del terrateniente francés Mercy se alzan y lo matan. Diez de ellos son detenidos y procesados; los defiende —muy a desgano— el "abogado de pobres". Decretada la pena capital, se sortea entre ellos al que será ejecutado. El sorteo,

amañado, señala a Marcellino Mamani, el curaca de la comunidad, que es fusilado en 1950.

Mamani no tiene militancia política definida; sólo es el cacique de su comunidad. Pero, tras su muerte, todos los partidos comienzan a disputar su memoria, para todos —incluyendo el MNR— es su mártir. La utilización de los indígenas ha dejado ya de ser privilegio de los partidos oligárquicos.

En 1951, enarbolando las banderas de la nacionalización de las minas y de la reforma agraria, el MNR gana las elecciones, pero un autogolpe de Urriolagoitia (el "mamertazo") le cierra el acceso al poder. El 9 de abril de 1952, un motín palaciego transformado en insurrección popular lleva a la presidencia a Víctor Paz Estenssoro. Los campesinos participan del alzamiento, junto a los mineros. Tras la victoria, los dirigentes campesinos aún renuentes se van plegando al MNR; desde entonces, por lo menos un centenar de ellos comienza a cobrar sueldo (entre 300 y 800 pesos bolivianos; cotización actual, doce pesos por dólar) del Ministerio de Asuntos Campesinos.

En agosto de 1953 se dicta la ley de Reforma Agraria. Parece haber llegado el turno de la revancha.

## INDIO CONTRA INDIO

Un enjuiciamiento estrictamente técnico de la reforma agraria implantada por el MNR sería extemporáneo a los fines de esta nota. Cabe sin embargo anotar que la clave de la frustración de esa política agraria radicó, significativamente, en la destrucción final del comunitarismo indígena: la parcelación de la tierra "creó —como señala Ramos— una clase de pequeños propietarios capitalistas, naturalmente de bajo nivel productivo y técnico, de ínfima capitalización, pero capitalistas al fin", estableciendo "un orden social conservador y una fuente de inmensos peligros", como la eventualidad de que el campesinado "se convierta en la base pasiva de una dictadura militar capaz de garantizarle la posesión de sus tierras a cambio de la recolonización del resto del país".

Esa no fue ciertamente la única —pero quizás tampoco la menor— de las contradicciones que habrían de echar abajo la "revolución nacional" del MNR. Obviamente, sin embargo, contribuyó a ahondar la enajenación del campesinado, incorporándolo a la escena política boliviana como masa de maniobra embarcada en la defensa de intereses ajenos a los suyos. A la demagogia movimientista se unió también la resistencia ancestral de los campesinos a aceptar como dirigentes a "blancos", representantes raciales de sus explotadores de siempre. El ministro de Agricultura de Paz Estenssoro, Nuflo de Chávez Ortiz, no fue nunca admitido como dirigente; Vicente Alvarez Plata, que forzó su nominación como secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz, fue muerto en Atahualpa cuando retornaba "triunfante" a la capital, en 1957.

Este incidente puede resultar ilustrativo: Alvarez Plata fue muerto por un grupo de campesinos encabezados por Paulino Quispe, hasta quien había llegado la noticia (falsa)

de que el dirigente agrario Toribio Salas había sido asesinado mientras se desarrollaba en Sorata un congreso del campesinado presidido por el ministro movimientista. El vehículo en que éste viajaba fue interceptado por los campesinos al mando de Quispe, quienes no tuvieron reparo alguno en considerar automáticamente culpable a Alvarez Plata de la presunta muerte de Salas.

Quispe terminó en la cárcel, de la que sólo logró salir en octubre de 1970, cuando obreros y universitarios asaltaron al Panóptico de La Paz y liberaron a decenas de prisioneros políticos al calor de la resistencia contra el golpe fascista de Rogelio Miranda. Por su parte, Toribio Salas, un sombrerero, cacique de Achacachi, que pasó del PIR AL MNR, llegó a ser diputado por La Paz y cayó preso en 1960, tras organizar la cooperativa "Cuba" en la región de Apolo, escenario de una de las masacres indígenas promovidas por los movimientistas.

Salas había caído en desgracia ante el MNR luego de un viaje a Moscú durante el cual se le atribuyeron declaraciones encendidamente revolucionarias. Hoy vive perseguido, sin poder ingresar a las áreas campesinas.

La suerte corrida por los dirigentes campesinos que se plegaron a las filas del MNR viene a igualarlos, a la postre, con aquellos que lo combatieron, como Antonio Alvarez Mamani, que participó en el frustrado golpe derechista de 1956, encabezado por Luis Peñaloza, y hoy vaga por los extramuros de La Paz oficiando de curandero.

Es cierto que la reforma agraria del MNR desató una fuerza social larga y férreamente oprimida: los terratenientes sintieron entonces el peso de la venganza indígena por siglos enteros de crímenes contra su raza. Pero fue el mismo MNR quien se ocupó de desviar los cauces de esta violencia, promoviendo la guerra "indio contra indio", enfrentando a Cliza con Ucureña, Achacachi con El Belén, Laimes con Jucumanis, Pocoata con Macha. Tras esos enfrentamientos, conocidos como "guerra del Valle", asomaban las disputas políticas dignitadas desde el gobierno: así por ejemplo, las libradas entre José Rojas Guevara, ahora movimientista, y Miguel Veizaga, dirigente campesino afiliado al Partido Comunista. Batallas raciales y políticas, en las que el ejército (destruido en 1952, pero reconstruido a partir de 1953) tomaba parte de acuerdo a los intereses del partido en el poder, ocultaban y postergaban una vez más el decisivo enfrentamiento clasista.

Por lo demás, ya en 1946 había comenzado la penetración norteamericana en el agro boliviano, a través del llamado Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, que "promovía" la construcción de escuelas mediante un aporte del 25% de parte del gobierno de Estados Unidos; el restante 75% debía ser erogado por el gobierno de Bolivia y los campesinos. Este tipo de "promoción", unida a la llamada "acción cívica" del ejército, sería más tarde utilizada por René Barrientos para su campaña política.

Pero el campesinado, casi sin otra orientación ideológica que su instinto, continuaba defendiendo al MNR mientras delante de éste se situaran aún la derecha y los terratenien-

tes, mayormente nucleados por Falange Socialista Boliviana (FSB). Bajo el segundo período del MNR en el poder, la Falange comenzó a instrumentar una vía de oposición política a través del "comiteísmo".

Los ex terratenientes y FSB, un partido de obvia filiación fascista, tomaron como pretexto de su oposición las demandas en favor de algunos sectores urbanos, particularmente en la ciudad sudoriental de Santa Cruz, asiento tradicional de una oligarquía ajena a la rica historia del Collasuyo y reacia a todo mestizaje. Las concesiones crecientes del MNR ante los intereses imperiales vendrían a incrementar la fuerza de la burguesía cruceña, cuyo Comité de Defensa de los Intereses de la Ciudad percibió durante largos años una regalía del 11% sobre el valor del petróleo extraído de la provincia por la Bolivian Gulf Oil.

Hacia la mitad del ciclo que el movimientismo habría de cumplir en el poder, la actividad "comiteísta" de Falange se instrumentó a través de la "Unión Juvenil Cruceñista" (UJC), grupo de choque de la reacción regional. El 14 de mayo de 1958, la UJC se apoderó del gobierno de la ciudad de Santa Cruz y lanzó un llamado para que el resto del país se uniera al golpe contra el MNR. Pero el intento fracasó: el vacío popular alrededor de los golpistas y el anuncio del envío de tropas leales al gobierno hacia Santa Cruz, bastó para determinar la fuga de los insurrectos. Al abandonar la ciudad, éstos anuncian por boca de sus cabecillas (José Gil Reyes, ex militar separado de filas por su posición reaccionaria, y Carlos Valverde, matón del fascismo local) que organizarán guerrillas para luchar contra el MNR.

El 16 de mayo llegan a Santa Cruz tropas regulares del Ejército, batallones de milicianos del Ministerio de Gobierno, milicias mineras, estudiantiles y campesinas; estas últimas vienen desde Ucureña al mando del lugarteniente de Rojas Guevara, Jorge Soliz Román. El ingreso de estas fuerzas a la ciudad se realiza pacíficamente: apenas algunos disparos al aire turban la siesta de los medrosos conspiradores. Pero el gobierno dispone que las milicias populares (a las que el MNR siempre temió no poder controlar totalmente) abandonen Santa Cruz esa misma noche; los hombres comandados por Soliz se apuestan a once kilómetros de distancia, sobre la carretera que conduce a Cochabamba.

El 18 de mayo, un campesino llega hasta Soliz y denuncia que su hija ha sido violada por un grupo de "guerrilleros" falangistas. Las milicias campesinas persiguen a los alzados y libran contra ellos un combate, matando a dos de ellos y haciendo prisioneros a otros dos; tres campesinos resultan muertos en la escaramuza. Los prisioneros son ejecutados por decisión de Soliz y de los dirigentes campesinos que lo acompañan. El suceso, ocurrido en Terebinto, descargará sobre Soliz el odio implacable de la derecha; desde ese momento, el dirigente campesino vivirá perseguido, eludiendo órdenes judiciales en su contra, pero capitalizando simultáneamente el creciente respaldo de los campesinos.

Pese a todo, Soliz permanecerá fiel al MNR



hasta el último minuto. El 3 de noviembre de 1964, ya en marcha el golpe barrientista, se presenta en Ucureña el coronel Juan Pérez Tapia para recabar el apoyo de los campesinos a la conspiración. El dirigente le da un plazo de cinco minutos para abandonar el pueblo y, en la asamblea que se realiza ese mismo día, se pronuncia en favor del gobierno de Paz Estenssoro (que se ha hecho reelegir para un tercer período presidencial y cuyo ministro de Asuntos Campesinos es en ese momento José Rojas Guevara). Ante la multitud armada, Soliz recuerda vividamente los crímenes cometidos anteriormente por el ejército contra el campesinado.

Pero el 5 de noviembre, al conocer la huida de Paz, los dirigentes campesinos se rinden ante el hecho consumado y se suman, condicionalmente, a la "restauración".

Varios de los suyos han quedado ya en el camino: Facundo Olmos, dirigente del ala izquierda del movimientismo, ha sido asesinado en 1963, sin que hasta hoy hayan aparecido los culpables; Felipe Flores y Arturo Loayza se han muerto mutuamente a balazos en 1964, ante la puerta del Ministerio de Asuntos Campesinos, probablemente por rencillas originadas en las maniobras con que el MNR dividía y reinaba.

## LAS VICTIMAS PACTAN CON SUS VERDUGOS

Con la complaciente ayuda norteamericana y recitando en quechua su deshilvanada demagogia, Barrientos se gana el apoyo de algunos sectores campesinos del valle de Cochabamba. Llegado al poder con la bandera de "reencauzar" la revolución nacionalista, desconfía, sin embargo, de los viejos dirigentes campesinos afiliados al movimientismo; aunque Rojas Guevara ha aceptado apoyarlo, la presión de los terratenientes cochabambinos y el mismo rechazo del dirigente le impiden ratificarlo en el Ministerio de Asuntos Campesinos.

Los dirigentes provinciales de Cochabamba presionan entonces para que Barrientos designe a Soliz en el Ministerio. Pero éste tampoco inspira confianza a los militares. En ese momento, por lo demás, Alfredo Ovando vivía una encendida luna de miel con los falangistas y procedía a reincorporar al ejército a todos los oficiales fascistas dados de baja por el MNR.

Soliz, semianalfabeto y brusco, cumplía casi todo lo que le ordenaban los generales, excepto tolerar la presencia de la Falange en el gobierno.

Barrientos, entre tanto, procura "institucionalizar" su alianza con los campesinos (según dirá años después un militar que fue su ministro, "Barrientos se apoyó en los campesinos, gobernó con la Rosca y engañó a las Fuerzas Armadas"), encomendando a los generales Armando Escobar Uria y Jaime Ayala Mercado la negociación del "Pacto Militar-Campesino", una suerte de compromiso de "defensa mutua" que implica para las víctimas de siglos estrechar la mano a sus no menos seculares verdugos. En nombre del campesinado suscribe el pacto José Rojas Guevara.

Pero Barrientos y Ovando, en el fondo, temen tanto a Rojas como a Soliz. Promueven entonces un Congreso Campesino y manobran para designar secretario ejecutivo de la Federación a Luis Zurita, a quien suponen más dócil por haber sido soldado de los batallones "colonizadores" del norte de Santa Cruz. (Lateralmente, vale la pena detenerse en este punto: los llamados "batallones colonizadores" fueron creados para no dar a los campesinos una completa preparación combativa durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio, pero rindieron a los grupos dominantes otros beneficios. Después de tres o cuatro meses de muy primario entrenamiento, los campesinos que integraban estos batallones eran destinados a realizar trabajos que beneficiarían a consorcios agrícolas luego instalados en las zonas desbrozadas por los "colonizadores", y alquilados como mano de obra barata a los terratenientes por los oficiales a quienes debían obedecer. La creación de estos batallones fue idea de... Alfredo Ovando Candia). Pero Zurita carente de ascendiente en el Valle y corrompido por las prebendas gubernativas, es acusado de malversar fondos fiscales y se ve obligado a renunciar. Años más tarde se verá complicado en el asesinato de Soliz.

En 1966 nace la historia que habrá de sellar definitivamente la suerte de Jorge Soliz Román.

Barrientos notifica a los campesinos que, a pedido del Ejército, tendrá que conceder por lo menos tres ministerios a FSB. Los dirigentes provinciales, con Soliz a la cabeza, rechazan de plano la imposición y piden a Barrientos que sea Ovando en persona quien les plantee la demanda de los militares en favor de "los cachorros de la Rosca". La reunión se efectúa en el Comando en Jefe: Ovando había inicialmente más de una hora acerca de la importancia de la "unión de todos los bolivianos" y de la necesidad de integrar a algunos "intelectuales" al proceso de "revolución en la revolución".

Soliz toma entonces la palabra y dice a Ovando que sus análisis y sus "bellas palabras" no le resultan comprensibles, pero que Falange es "el partido de la reacción" y que "si les da la gana, que se sumen al proceso de "integración nacional" trabajando, pero no gobernando".

Termina lanzándole a Ovando este desafío: "¿El Ejército ha vuelto a ser rosca-parte (instrumento de la rosca) o es el aliado de los campesinos? Defínase en este momento, ya que usted es el Comandante en Jefe".

Ovando debe retroceder: alega que el Ejército es un "fiel aliado" de los campesinos, que sus palabras han sido "mal interpretadas" y que él personalmente hará respetar la decisión campesina de impedir la designación de ministros falangistas. Promete a Soliz que le presentará al abogado Gonzalo Romero, de quien dice "es el único falangista correcto".

Soliz agradece el apoyo militar ofrecido por Ovando y dice que recibirá muy bien a Romero en Ucureña, "si se atreve a ir".

Terminada la reunión, los campesinos van a la casa de Barrientos y le hacen conocer la promesa de Ovando. En quechua, Barrientos



habla a los campesinos sobre la dualidad de conducta de Ovando.

En castellano, empero, su propia dualidad no es menor: los falangistas no entran al gabinete, pero Barrientos les otorga participación parlamentaria, un tercio del Senado y un quinto de la Cámara de Diputados.

La profecía de Ramos se confirma: los campesinos pasan a ser "la base pasiva de una dictadura militar capaz de garantizarles la posesión de sus tierras a cambio de la colonización del resto del país".

Pero las tensiones internas no han desaparecido, por cierto. En este panorama irrumpe un fenómeno nuevo que, con el tiempo, habrá de ser catalizador: el foco guerrillero comandado por el Che. El régimen manobra rápidamente para prevenir todo eventual apoyo campesino a la guerrilla: moviliza a los dirigentes que le son adictos y nutre las tropas de rangers entrenadas por militares norteamericanos con campesinos jóvenes de la propia zona de operaciones. No deja, empero, de encontrarse con alguna sorpresa: el veterano Rojas Guevara es sorprendido en Muyupampa con la intención evidente de tomar contacto con los guerrilleros.

Barrientos reacciona con la pueril paranoia que le es propia: hace conducir a Rojas Guevara al palacio presidencial y lo encierra en una habitación contigua a su dormitorio, con un candado del que sólo él posee la llave. El dirigente campesino pasa todo un mes en esas condiciones (y cabe suponer que habría pasado así un tiempo indefinido si no hubiese podido hacer conocer su situación sobornando al carcelero). Liberado, Rojas recibe de Barrientos una crecida suma de dinero para que olvide la historia: sabiendo más por viejo que por diablo, el veterano líder campesino opta por abandonar toda actividad sindical. Dueño de una flota de camiones, disfruta ahora su descanso con la esperanza de eludir la muerte violenta que ha acabado con todos sus camaradas.

A la muerte de Barrientos, toda la maquinaria militar que estaba trabajando para la elección de Ovando se vuelca a Cochabamba para azuzar a los campesinos en contra de Siles Salinas. Resentido, éste da a publicidad la lista de sueldos que los dirigentes campesinos reciben del gobierno.

Soliz, que ha llegado finalmente a ser ministro de Asuntos Campesinos de Barrientos, se ve desplazado del gabinete: es la venganza de Ovando, ese viejo zorro paciente. Pero Soliz cree inicialmente que ha perdido su puesto debido a la resistencia de Siles Salinas, hasta que el efímero presidente, luchando torpemente por sobrevivir, le asegura que está dispuesto a restituirlo al ministerio si Ovando le otorga su respaldo ante él. El general se niega a hacerlo, por supuesto.

Crecientemente separado de sus bases por el ejercicio del poder, Soliz trata de reconquistar su dominio sobre la Federación cochabambina, pero los ovandistas, digitados a través del "Pacto Militar-Campesino", le cierran el paso. El 26 de septiembre de 1969, Ovando derroca a Siles Salinas. A principios de noviembre, algunos dirigentes campesinos "proponen" (de hecho, es la voz de mando que cierra su círculo) al general-presidente

la eliminación de Soliz. Lacónicamente, Ovando responde: "Háganlo, pero pronto".

El 29 de noviembre, Jorge Soliz Román cae acribillado por el fuego de cinco metralletas en las proximidades de Cochabamba.

## MUERTE POR MUERTE

El MNR desarmó a las milicias campesinas que habían arrancado sus fusiles al ejército de la rosca. Volvió en cambio a armar a ese ejército, que finalmente lo voltearía.

Barrientos utilizó a los campesinos, pero, naturalmente, nunca les devolvió sus armas. En 1964, cuando se preparaba la conspiración contra Paz, los campesinos del Valle de Achacachi recibieron del ejército algunas pequeñas partidas de viejos fusiles máuser. En total: 170 fusiles, ocho metralletas y tres fusiles ametralladora. Ocho carabinas M-1 fueron regaladas luego por Barrientos a algunos dirigentes campesinos. Eso fue todo.

En 1968, Barrientos se apoderó de una partida de armamento comprada por Antonio Arguedas, ministro de Gobierno, que en julio de ese año debió asilarse en Chile al descubrirse que él había facilitado a Cuba una copia del diario de campaña del Che en Bolivia. La partida estaba integrada por 200 metralletas, 50 revólveres, 12 morteros ligeros, 20 fusiles ametralladora con mira telescópica y dos ametralladoras con mira infrarroja. De esas armas, una pequeña cantidad se destinó a los guardaespaldas del propio Barrientos, que almacenó el resto en Cochabamba. Una parte, guardada en la casa que poseía Barrientos en el camino a Quillacollo, fue recuperada por el ejército a su muerte. Del resto, nada se sabe: sólo se sospecha que David Fernández, último ministro de Gobierno de Barrientos, pueda tener alguna noticia al respecto. La importación hecha por Arguedas nunca fue revelada, por razones políticas.

Los campesinos bolivianos continúan casi tan desarmados como en tiempos de la colonia. Pero quizás no permanecerán mucho tiempo en esa situación, porque entre tanto han ido adquiriendo, antes que fusiles, un arma fundamental: la conciencia. Hace ya tiempo que una considerable parte del campesinado se ha rebelado contra la utilización que de él pretenden hacer los grupos dominantes. No pocos dirigentes pagaron esta rebeldía con cárcel y persecuciones durante la brutal represión barrientista, para la que sólo eran campesinos los que se prestaban a ser usados por el régimen.

Así, contra la regimentación oficialista de los sindicatos campesinos, se ha creado el llamado "Bloque Campesino Independiente", que ha repudiado el "Pacto Militar-Campesino", y se ha incorporado a la Confederación Obrera Boliviana (COB). La batalla no es ciertamente fácil: enfrente están la subvención oficial u oficiosa a los caciques oportunistas, la resistencia militar a romper el increíble "Pacto", la alienación política e ideológica pretextada por la "reforma agraria" del MNR. Pero más de cuatro siglos de explotación han enseñado a los campesinos que el poder surge del cañón del fusil: la "Asamblea Popular" instalada por la COB el primero de mayo úl-

timo se propone la organización de milicias obrero-campesinas y reclama del gobierno de Juan José Torres la entrega de armas para respaldar el poder popular.

Enajenados, corrompidos, manoseados, utilizados, engañados, perseguidos y finalmente asesinados, millones de campesinos han regado con su sangre, desde los tiempos del Collasuyo, la tierra y la riqueza que de ella extraían, de todos y para todos.

Esa sangre no debe haber sido derramada en vano. Muerte por muerte, alguien habrá de repetir pronto las palabras que, doscientos años atrás, Tupac Amaru lanzó a la cara del visitador Arceche, que le exigía delatar a sus presuntos cómplices: "Aquí no hay más cómplices que tú y yo; tú por opresor, y yo por libertador, merecemos la muerte".

CARLOS NUÑEZ

## ANÁLISIS POLÍTICO DE LA UNIDAD POPULAR

**★ EL COMANDO POLÍTICO de la Unidad Popular entregó un documento el 25 del mes recién pasado, analizando la situación nacional. Por considerarlo de interés para nuestros lectores, lo reproducimos a continuación en gran parte.**

**L**A UP denuncia a la faz del país y del mundo entero, que las fuerzas reaccionarias han desatado una ofensiva tendiente a desfigurar la imagen nacional e internacional del Gobierno y a deteriorar su prestigio ante las masas con el vano intento de reconquistar el poder a cualquier precio.

Tenemos derecho a suponer que agencias extranjeras al servicio del imperialismo, que en América y en otros continentes han provocado asesinatos, golpes de Estado, guerras civiles y aun enfrentamientos entre países hermanos, no son ajenas a estos planes.

Sirviendo esta gran maniobra antipopular y antidemocrática, ha sido brutalmente asesinado el ex vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Zujovic.

A dos semanas del atentado han quedado claramente establecidos los siguientes hechos:

1º) Que la ejecución material del asesinato ha sido realizada por un comando que reclutó a elementos políticamente extraviados y delinquentes comunes, con vínculos y enlaces extranjeros cuyo carácter no es difícil presumir y que las investigaciones deberán esclarecer completamente.

2º) Que desde el primer momento la Unidad Popular y cada uno de sus partidos han repudiado este deleznable acto terrorista, absolutamente ajeno a las tradiciones y a las prácticas del pueblo chileno.

3º) Que el Gobierno no sólo lamentó y condenó con energía el hecho, sino que tomó desde el primer instante eficaces medidas para identificar y capturar rápidamente a los implicados.

4º) Que el Servicio de Investigaciones, con su director, Eduardo Paredes, a la cabeza, ha cumplido un papel relevante y principal en estas pesquisas que incluso costaron la vida de tres funcionarios, lo que muestra el carácter politiquero y arbitrario de la desconfianza que algunos sectores han manifestado respecto de este Servicio.

5º) Que el Gobierno recabó con éxito la colaboración de todos los servicios de inteligencia del Estado desde antes de la muerte del señor Pérez Zujovic, y que esto se formalizó oportunamente a través de una comisión coordinadora ad hoc, a la cual también han tenido acceso el presidente del Senado y ministro sumariante.

La claridad y contundencia de estos hechos ha vuelto ridículos los intentos de los partidos de oposición que han buscado al unísono culpar al Gobierno, acusándolo de tolerar los grupos terroristas y de promover un clima de odio y violencia. El país no olvida que las campañas del terror han sido un instrumento de violencia psicológica utilizado sin límites por esos partidos. El país constata que todos los grupos terroristas de ultraderecha y ultraizquierda que operan hoy día se han constituido y armado en el Gobierno anterior. En cambio, el país comprueba que con este Gobierno han cesado los enfrentamientos entre el pueblo y las fuerzas policiales, que fueron hasta un pasado muy reciente, la forma principal de manifestación de la violencia y que costó muchas vidas de obreros, pobladores y estudiantes.

Este lamentable suceso ha sido aprovechado por la derecha, Partido Nacional y Democracia Radical, para maniobrar políticamente tras su objetivo de agrupar a toda la oposición alrededor del ala derechista de la Democracia Cristiana. En efecto, sobrepasando sus propios planes de constituir un "frente de ideas" ha logrado conformar un contubernio de toda la oposición, que ya se ha concretado en la Universidad de Chile, en la censura a la mesa de la Cámara de Diputados y en la elección complementaria de Valparaíso. Esto demuestra a quién servía y sirve el acto terrorista perpetrado en la persona del señor Pérez Zujovic.

Esta oposición unida ha lanzado una ofensiva tendiente a centrar el fondo del problema político nacional en el supuesto peligro que correrían las libertades individuales y las garantías democráticas por la acción de elementos terroristas.

En el país no están en juego ni la institucionalidad ni la convivencia democrática. Lo único que está en juego son los intereses de un reducido grupo de privilegiados, constitu-



do por los clanes económicos monopolistas y terratenientes que, junto con el imperialismo, han sido durante más de 150 años los amos de nuestra patria.

El pueblo de Chile sabe que la Unidad Popular se orienta por un programa claro y definido de transformaciones revolucionarias, que desarrolla a través de los mecanismos legales vigentes. Su concepción se basa en el desarrollo de la lucha de masas de acuerdo a las condiciones concretas de desenvolvimiento político y social del país. Otros movimientos de izquierda, por ejemplo el MIR, no comparten la concepción programática, estratégica y táctica de la Unidad Popular. Ellos responden de su política, así como la Unidad Popular responde de la suya.

No obstante lo anterior, la Unidad Popular valora las rectificaciones que esos movimientos han hecho y pueden hacer de su política.

El Gobierno del compañero Allende, cumpliendo estrictamente los compromisos contrados públicamente frente al pueblo, y en uso de sus soberanas atribuciones constitucionales, en pocos meses ha llevado a cabo una política de efectivas realizaciones en beneficio directo de las masas trabajadoras y ha iniciado las transformaciones de fondo que conducen a terminar con el predominio de la gran burguesía nacional y del imperialismo.

El problema de fondo del cuadro político no es el terrorismo. Quienquiera que lo haya promovido y ejecutado, ha sido desbaratado por los organismos policiales y será aplastado por el Gobierno si algunos quisieran continuar por ese camino. La cuestión vital, lo que exaspera a las clases explotadoras, son los cambios reales que está ejecutando el Gobierno y que se expresan en la profundización de la reforma agraria, en las nacionalizaciones de grandes empresas y de la banca, en fin, en el cumplimiento consecuente del programa que fue la base de la campaña presidencial.

La Unidad Popular no permitirá que se altere el sentido real de lo que ocurre en el país. Junto con dar seguridades al pueblo que está implacablemente contra todo desborde terrorista, expresa su decisión de avanzar por el camino democrático, nacional y revolucionario que se ha trazado.

En base a este análisis sobre la actual coyuntura política, la Unidad Popular estima indispensable:

#### **IMPULSAR LA MOVILIZACIÓN DE MASAS, SUSTENTO PRINCIPAL DEL GOBIERNO**

El Comité Político de la Unidad Popular ha reiterado que la movilización permanente de las masas y su participación directa, creadora y efectiva en el cumplimiento de las tareas del programa y en la conducción del Gobierno constituye la más sólida garantía para la defensa del Gobierno popular, para ampliar su base social de sustentación y para asegurar su carácter profundamente revolucionario.

En este sentido se ha considerado de fundamental importancia acelerar la participación de los trabajadores en las empresas del



**SALVADOR ALLENDE:** La Unidad Popular analiza aquí las circunstancias políticas que vive el país.

Estado a través de comités de producción y consejos de administración, donde la base de cada empresa elegirá directa y democráticamente sus delegados para dar un impulso decisivo a la producción, así como a la transformación del carácter del Estado.

De la misma manera se hace indispensable incorporar a las organizaciones de masas en la detección, estudio y solución de sus problemas más urgentes. En este sentido, la Unidad Popular ha acordado proponer la creación de comités provinciales y departamentales de las organizaciones de pobladores y de los organismos habitacionales del Gobierno para enfrentar los agudos problemas que existen en materia de vivienda y urbanización y convenir de conjunto las soluciones más urgentes.

En el plano de la educación se ha acordado promover reuniones entre autoridades de Gobierno y las organizaciones de estudiantes, de maestros y de padres y apoderados con el mismo objetivo.

Se ha considerado, asimismo, la necesidad de activar el funcionamiento de los Consejos Campesinos para acelerar la reforma agraria y resolver los problemas de las masas del campo.

Todas estas iniciativas acercarán más aún al pueblo y su Gobierno, permitirán encarar más eficientemente los problemas que tenemos por delante, hará posible que todos aquellos que están por impulsar los cambios revolucionarios, sin discriminación de ninguna naturaleza, puedan realizar su aporte al proceso, y significará avanzar con rapidez en el establecimiento de un auténtico Estado Popular.

Hoy día, cuando es la clase obrera y el pue-

blo quienes están en el Gobierno del país y en una situación en la que cada vez más las masas participan en su dirección, la Unidad Popular rechaza la toma indiscriminada de predios agrícolas, de fábricas, de viviendas y de establecimientos educacionales como una forma de lucha que daña los intereses del pueblo y que ha perdido, por tanto, eficacia y urgencia.

Denunciamos ante el país la actitud demagógica de aquellos demócratacristianos que han incitado a la toma de departamentos, fundos, terrenos y oficinas públicas. Llamamos a las bases de la Unidad Popular a combatir a los oportunistas de derecha e izquierda que, engañando a los sectores más atrasados del pueblo, buscan sacar dividendos mezquinos y desprestigiar al Gobierno. Los partidos de la Unidad Popular deben permanecer vigilantes para impedir que actitudes de este tipo se infiltren en sus filas.

Respecto del MIR, los partidos de la Unidad Popular han estado de acuerdo en delimitar con claridad sus responsabilidades y posiciones en esta materia. La Unidad Popular no confunde la movilización de masas con la toma indiscriminada y anárquica que exacerba los intereses particulares y divide y hace competir a diversos sectores del pueblo, que dispersa los recursos del Gobierno y quiebra la coherencia y eficacia de sus planes, y que da pie para que el enemigo aglutine tras sus banderas a los sectores medios de la población.

La Unidad Popular entiende que toda movilización de masas debe fortalecer, y no debilitar, al Gobierno popular, instrumento principal del pueblo chileno por la conquista del poder. Esto no aparece siempre claramente comprendido en los documentos y actuaciones de grupos ajenos a la Unidad Popular.

La Unidad Popular ha acordado, además, realizar un gran esfuerzo por activar el funcionamiento de los CUP, por cuanto constituyen un factor irremplazable para cohesionar a los sectores políticamente más maduros de las masas, desarrollar correctamente su movilización, contribuir a su educación política y defender con decisión al Gobierno popular. Revitalizar los CUP, crearlos allí donde no existan y proponer la realización de tareas concretas a cada uno de ellos, serán cuestiones a las que el Comité Político y los partidos de la Unidad Popular le otorgarán especial dedicación.

### AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Los partidos de la Unidad Popular han estimado unánimemente que el Gobierno que encabeza el compañero Allende, respaldado por la mayoría absoluta del país en las elecciones de abril, está hoy en condiciones de avanzar con energía y con autoridad en el cumplimiento del programa.

En este sentido se ha estimado indispensable poner en la perspectiva de las masas una Cámara Única, moderna, democrática y popular para este año.

Del mismo modo, los partidos han acorda-

do dar la máxima celeridad a la delimitación concreta del área de propiedad social en cada una de las ramas de la economía, así como impulsar las políticas económicas conducentes al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. La Unidad Popular estima que éstas son dos partes inseparables de una misma política. El control de los centros estratégicos de la economía por parte de todo el pueblo es lo que permitirá liberar a los pequeños y medianos capitalistas de las cargas que les imponían los monopolios.

La batalla contra los monopolios, junto a la recuperación definitiva para Chile de las empresas de la gran minería del cobre y el cumplimiento de la meta de expropiar este año mil latifundios, constituyen, de conjunto, un golpe mortal a las clases hasta ahora dominantes y enemigas irreconciliables de nuestro pueblo: el imperialismo, la burguesía monopolística y los terratenientes. El cumplimiento cabal de estas medidas marca el comienzo de la liberación definitiva de nuestro pueblo y de la construcción de la sociedad socialista.

La Unidad Popular impulsará también el despacho rápido de los siguientes proyectos de profundo contenido democrático:

- Voto a los analfabetos.
- Legalización de la CUT.
- Modificación del Código del Trabajo.
- Financiamiento de los centros de madres.
- Ley de arriendos.
- Ministerio de la Familia.
- Ministerio del Mar.
- Fondo de Capitalización.

La rápida aprobación de estos proyectos permitirá un fortalecimiento significativo de las organizaciones de masas, incorporará a la vida política a amplios sectores del pueblo y otorgará al Gobierno instrumentos institucionales indispensables para el cumplimiento de su programa. Todos ellos contribuyen a desarrollar de manera importante la democracia chilena. El pueblo deberá estar vigilante para constatar la actitud ante dichos proyectos de los sectores de la oposición que dicen estar dispuestos a garantizar la democracia en nuestro país.

### COMBATIR EL TERRORISMO Y DESBARATAR LA SEDICION

La Unidad Popular está consciente de que la mejor defensa del Gobierno Popular reside en la actitud vigilante y combativa de las masas y en la firmeza de las tradiciones profesionales y democráticas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Popular verá el modo de perfeccionar e impulsar los proyectos del Ejecutivo que aumentan la dotación humana y material de Carabineros e Investigaciones, hasta ahora rechazado por la oposición, y el que establece un procedimiento expedito para sancionar a quienes cometan el delito de asesinato político. Asimismo buscará el mejor camino para dar existencia legal a un organismo de seguridad especializado que vele por la vida del presidente de la República y de los más altos dignatarios del Estado.